Imprimir

Mientras escribo estas líneas somos testigos de una masacre sin precedentes en el siglo XXI. La ofensiva inmisericorde desatada por el gobierno de Israel tras los ataques de Hamás ha asesinado en diez semanas a más de 18.000 palestinos, de los que dos tercios son mujeres, niños y niñas. Ha destruido el 70% de edificios en el norte de la Franja, un porcentaje superior al que causó el bombardeo de Dresde en la Segunda Guerra Mundial, hoy considerado un paradigma de los crímenes de guerra. Ha devastado las tres universidades de Gaza. También ha bombardeado de manera deliberada panaderías, escuelas y hospitales.Ante esta campaña de castigo colectivo, 1,7 millones de gazatíes –más del 80% de la población– han sido desplazados forzosamente a la frontera con Egipto, donde las condiciones empeoran cada minuto y no hay infraestructura para acogerlos ni garantía alguna de que estén a salvo. Entre las víctimas se cuentan doctores, periodistas, personal de la ONU (101 muertos, el mayor número en la historia de la organización) y hasta poetas reconocidos, como el recientemente asesinado Refaat Alareer. Son imágenes insoportables: uno de los ejércitos más sofisticados del mundo ejerciendo metódicamente una violencia desgarradora sobre la población civil.
Nadie que mire la realidad de lo que está sucediendo con objetividad y decencia puede negar que en Gaza se está produciendo una limpieza étnica. Como han expresado reconocidos expertos en el Holocausto y el estudio histórico de los genocidios, el momento de actuar para frenar esta masacre es ahora. No podemos refugiarnos en fórmulas alambicadas ni permanecer en silencio, como hacen tantos dirigentes europeos cargados de razones ante otros conflictos, pero enmudecidos ante la comisión de flagrantes crímenes de guerra contra el pueblo palestino. Será imposible justificar ante la historia el haber mirado hacia otro lado.

Afortunadamente, España no se ha comportado así. Una amplia mayoría de nuestros compatriotas sabe compatibilizar la condena de los ataques contra civiles perpetrados por Hamás con la repulsa ante el ensañamiento israelí con el pueblo palestino. Entienden que Israel viola de manera sistemática los derechos de palestinos en la Franja y la Cisjordania ocupada; se oponen al sistema de apartheid y a los asentamientos ilegales que Israel sigue construyendo con total impunidad; y defienden el reconocimiento del Estado de Palestina como un paso encaminado hacia la resolución del conflicto.

La visita del presidente Sánchez al paso de Rafah –donde describió como inaceptable la matanza de civiles, abriendo un espacio al que se sumarían después otros dirigentes– y la posición expresada por distintos miembros del Gobierno de España – exigiendo que los responsables de estas violaciones masivas de derechos humanos rindan cuentas ante un tribunal internacional– expresan políticamente los valores de la mayoría de nuestra sociedad. Claro que no basta con expresar esas posiciones: debemos honrarlas con hechos.

Hay tres medidas que, en mi opinión, España debería adoptar de manera inmediata. La primera es respaldar públicamente a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en sus esfuerzos por investigar y perseguir crímenes de guerra cometidos en la Franja de Gaza. Nuestro país se uniría así a la decisión del Gobierno de Irlanda, que ha apoyado públicamente los esfuerzos de la CPI en este conflicto dotándola de fondos para ello, como ya hizo ante la agresión rusa a Ucrania. El principio tras esta medida es claro: los responsables de cometer violaciones masivas de los derechos humanos deben rendir cuentas por ello ante un tribunal, y sus víctimas tienen derecho a que se conozca la verdad, se haga justicia, y su daño sea reparado.

La segunda medida, en consonancia con esta posición, es dar con las fórmulas efectivas para detener cualquier operación de compraventa de armas –y de cualquier otro bien o servicio relacionado con el esfuerzo de guerra y la ocupación ilegal– con un país involucrado en violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos. No podemos seguir actuando como si estos hechos no estuvieran sucediendo. Debemos conminar a nuestros socios a que adoptaran medidas similares con el fin de que la presión fuera múltiple y efectiva.

La tercera medida es el reconocimiento inmediato del Estado de Palestina. La presidencia del Consejo de la UE ofrece un marco idóneo para hacerlo en conjunción con otros socios europeos, empezando por Bélgica, que ostentará la siguiente presidencia y ha mostrado una gran sintonía en este ámbito, y extendiéndose a otros países que deseen adherirse a la iniciativa. Pero de no ser así, España debería proceder en todo caso antes de que termine su presidencia a finales de 2023. Es cierto que el reconocimiento por sí solo no soluciona nada, pero el mensaje que enviará esta decisión es nítido y servirá para incentivar más acciones

por parte de la comunidad internacional.

Acometer estas medidas es indispensable por varios motivos. En primer lugar, porque todas ellas sirven para sustanciar la línea que España ha mantenido a lo largo de esta crisis, caracterizada por el compromiso con un alto el fuego permanente y con una solución justa al conflicto entre Israel y Palestina. Es necesario probar con hechos que nuestro país puede asumir un papel de liderazgo frente a la ola reaccionaria que recorre Europa, y ser referente fuera de ella para los millones de personas que, en un movimiento social que recorre el planeta entero, se movilizan para frenar esta barbarie. Pero también es necesario comprender que, fuera de la burbuja occidental, Europa es a menudo percibida como un sujeto hipócrita, que solo alecciona sobre los derechos humanos y el orden legal internacional cuando las crisis encajan en sus intereses. Frenar esta deriva es también urgente.

Por encima de todo, la gravedad de lo que está sucediendo en Gaza nos obliga a hacer todo lo que esté en nuestra mano para poner fin de inmediato a la masacre. Como acaba de recordar el presidente colombiano Gustavo Petro, un hilo une la barbarie en Palestina con las múltiples crisis que atraviesan nuestro mundo. Si presenciamos este exterminio con apatía, reaccionaremos de la misma manera ante las catástrofes del futuro. Utilicemos todos los medios para presionar, movilizar y detener esta masacre que nos interpela gravemente. La indiferencia es una posición inasumible

Pablo Bustinduy, Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 desde noviembre de 2023. Fue portavoz del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso en la anterior legislatura.

Fuente: https://sinpermiso.info/textos/nuestra-responsabilidad-en-gaza

Foto tomada de: https://sinpermiso.info/textos/nuestra-responsabilidad-en-gaza